Quito, 14 de enero de 2021

Doctora

Daniela Salazar Marín

Jueza Ponente Constitucional (SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR)

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Doctores Leonardo Xavier Barriga Bedoya, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Diana Gisela Fernández León, Jueces Provinciales de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción extraordinaria de protección No. 1528-20-EP, propuesta por Clelia Mariela Pozo Acosta, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en cumplimiento del auto de 18 de diciembre de 2020, remitido mediante Oficio No. 5581-CCE-SG-NOT-2020 de 24 de diciembre de 2020 y notificado el 29 de diciembre de 2020 a los suscritos jueces, presentamos informe en los siguientes términos:

1.- ANTECEDENTES

1.- En el contenido de su demanda de acción de protección, la accionante Clelia Mariela Pozo Acosta, afirma en síntesis que: “Con fecha 7 de noviembre de 2014, se dio inicio al sumario tipificando la presunta infracción en la que determina que el Art. 109, numeral 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé sanción de destitución, se argumentó como fundamento para el inicio del sumario disciplinario que en el período comprendido entre el 01 de junio de 2012 al 31 de marzo de 2014, la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, ha declarado en los formularios de “Liquidación de Ingresos Brutos de las Notarías” valores diferentes a los que constan en las facturas emitidas por servicios notariales existiendo por lo tanto diferencias entre el valor mensual pagado como participación al Estado con el valor que debió cancelarse, conllevando una apropiación indebida de una parte de dichas tasas. (...). Sin atender ni despachar mis escritos y alegatos expuestos, el 19 de marzo de 2015, se notifica por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario

del Consejo de la Judicatura en donde se acoge el inconstitucional, ilegal e injusto informe motivado y se procede a destituirme del cargo que desempeñé por 16 años y seis meses, esto es en la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito con probidad, honradez y sin tacha alguna”.

Entre sus pretensiones, señala: 1) Se acepte la demanda; 2) Que se declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución expedida el 13 de marzo del 2015 a las 12h50, por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente disciplinario MOT-178- SNCD-2015-ACS; 3) Que se disponga la reparación integral de derechos constitucionales que como ser humana, ciudadana y funcionaria judicial tiene la accionante; debiendo disponer: a) La restitución de todos los derechos personales que le fueron quitados como Notaria del cantón Quito y restitución al cargo con todos los deberes y derechos; b) La restitución al cargo, respetando el periodo de seis años, ya que sólo ha actuado por un año; c) El pago en concepto de lucro cesante y daño emergente; d) Que se declare expresamente la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso Coactivo N.- CJ-DPP-004-2014, por no existir fundamento para la coactiva; e) Pago de las costas judiciales y los honorarios de sus Defensores.

2.- Mediante sentencia de 19 de febrero de 2019, el Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Lñaquito resolvió rechazar la acción de protección por no identificar vulneración de derechos constitucionales.

3.- Mediante sentencia de 3 de marzo de 2020, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primer nivel, resolviendo el recurso horizontal de aclaración con fecha 01 de julio de 2020.

2.- DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE EL ACCIONANTE CONSIDERA HAN SIDO VULNERADOS

Indica dentro de su acción extraordinaria de protección que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva e igualdad.

Motivación.- El fallo emitido por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia no ha vulnerado este derecho, toda vez que, en forma detallada la sentencia contiene todos los elementos sometidos al derecho procesal constitucional, se ha identificado plenamente el acto administrativo (Resolución expedida el 13 de marzo del 2015, a las 12h50, por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente disciplinario MOT-178- SNCD-2015-ACS;) emitido por la autoridad pública no judicial, que en este caso a criterio de la accionante vulnera sus derechos constitucionales. Constan los antecedentes, un resumen

de las alegaciones de los legitimados activo y pasivo, con sus pretensiones, expresadas en forma clara y detallada; las consideraciones del Juez A quo y la prueba actuada ante este servidor judicial, sobre las cuales ha basado su decisión judicial; el análisis pormenorizado del Tribunal de Alzada a la luz de las normas constitucionales y legales, a efecto de establecer, si la autoridad que emitió el acto administrativo ha violado o no los derechos contemplados en la Constitución de la República o en las normas internacionales que garantizan los derechos humanos, objeto primordial de la acción de protección prescrita en el artículo 88 de la Carta Magna; de manera que, en base a un análisis integral del expediente la Sala ha emitido su resolución conforme a derecho, observando las normas constitucionales y legales establecidas en el Art. 76, numeral 7, literal I) de la Constitución de la República y artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece como requisitos de una sentencia constitucional, los siguientes: antecedentes, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, la argumentación jurídica y resolución, dentro de los parámetros de lógica, razonabilidad y comprensibilidad.

Dentro del contenido de la sentencia se estableció de manera motivada que “las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme lo dispone el Art. 173 de la Constitución de la República, deben ser impugnados en vía judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativa, pues así lo entendió la accionante, cuando presenta la impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, amparándose en la facultad que le concede el artículo referido en concordancia con los Arts. 1, 3, 5, 10 literal b) 23 literal c), y 24 literal a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (expediente N.-2015-01345), pero sin embargo de ser admitida a trámite, dicha acción la desiste, permitiendo que la resolución administrativa quede ejecutoriada y cause efectos de cosa juzgada. Este desistimiento sólo perjudica a la parte que lo hace, por constituir reconocimiento y aceptación de la resolución impugnada, al ser una forma de renunciar derechos, y ello solo cabe respecto de los propios, nunca de los ajenos, entendiéndose que el acto administrativo impugnado que data del año 2015, fue objetado en la vía que a criterio de la legitimada activa era la adecuada y eficaz para solventar sus pretensiones, activando la vía contencioso administrativa, recurso en el que hubo desistimiento de la accionante. Si bien la acción de protección de los derechos, como garantía jurisdiccional, es un mecanismo judicial reconocido en la Constitución, al alcance de todos los ciudadanos, para que en caso que sus derechos hayan sido violentados por una autoridad pública o persona privada, por actos u omisiones no judiciales, éstos puedan obtener su restablecimiento y una posterior reparación por el daño causado, con lo cual, la acción de protección es la realización de un derecho constitucional/humano en sí mismo; en la especie, es la hoy recurrente la que no consideró en prima facie vulneración de derecho constitucional alguno que amerite la interposición de esta acción que per se tiene como

objetivo reparar el daño causado ante la vulneración de un derecho constitucional. En la causa constitucional sub lite, la doctora Clelia María Pozo Acosta, torna subsidiaria la acción de protección, cuando primigeniamente acudió a la justicia ordinaria. En tal virtud, cuando la Constitución prescribe en el artículo 88 la garantía de un amparo directo, debe entenderse que al existir una vulneración de un derecho constitucional no puede condicionarse la protección de los derechos constitucionales a la presentación de una acción judicial adicional, que impida o retarde la defensa de forma injustificada del derecho, pues dicha interpretación desnaturaliza la esencia misma de una garantía de protección de los derechos constitucionales...” Por tanto, los asuntos de mera legalidad relativos al sumario administrativo y resolución expedida el 13 de marzo de 2015, a las 12h50 por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente disciplinario MOT-178-SNCD-2015-ACS, tuvieron vía expedita y eficaz, en sede administrativa, no obstante, se alega vulneración de derechos constitucionales como el derecho a la defensa, seguridad jurídica, motivación, (debido proceso), al no notificarse con el informe motivado de la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura.

Se indica igualmente, que el Art. 76 de la CRE, indica que, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, en el cual se enumeran una serie de garantías entre las cuales está el derecho a la defensa, la prohibición de indefensión, el contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, la posibilidad de recurrir del fallo. La accionante afirma que se afectó su derecho a la defensa, al no habersele notificado con el informe motivado de la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura que sirvió de base para que se dicte la resolución de 13 de marzo de 2015, dentro del expediente No. MOT-178-SNCD-2015-ACS. Para el efecto, se hace un análisis de los elementos constantes del expediente, haciendo referencia a que con Memorando N.-674-DP17-OCD-PCH-MM-2015, de 25 de febrero del 2015 la Secretaria de la Oficina de Control Disciplinario de Pichincha, remite el expediente del sumario disciplinario No. 2085-2014, junto con el informe motivado en virtud del cual la Directora Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura recomendó se imponga la sanción de destitución a la doctora Clelia Mariela Pozo Acosta, por sus actuaciones como Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, por considerar que la funcionaria sumariada habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 15 del Art. 109 del Código Orgánico de la función Judicial. En la resolución de 13 de marzo de 2015, se ha realizado el análisis de forma (punto 3), se identifica la tipificación de la infracción, se advierte la oportunidad en el ejercicio de la acción disciplinaria, en el análisis de fondo, se advierte el argumento del informe motivado, se detalla los argumentos de la sumariada en la defensa; se determina la existencia de los hechos probados (que son hechos contables), se hace referencia a la argumentación jurídica sobre la existencia y demostración de la infracción

disciplinaria cometida y que a su vez es el motivo de la resolución, para concluir con la resolución en la que se determina la necesidad de sancionar con la destitución, por estar probados los hechos fácticos de la infracción y que ha sido puesta en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo tanto no se evidencia la inexistencia de falta de motivación o fundamentación en la resolución y más aún que no se le haya permitido ejercer el derecho a la legítima defensa de la sancionada, pues fue notificada con la inicio del proceso disciplinario, quien ejerció su derecho a la defensa oponiéndose al procedimiento administrativo, y actuando prueba, quien deja indica en forma expresa que “las diferencias de valores que ha reportado en perjuicio del Estado, en la liquidación de ingresos brutos de la Notaría a su cargo, durante el período señalado, deja constancia de su predisposición de depositar los valores que la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura determine debe cancelar como valores no remitidos por el errado proceder de sus subalternos”. Sobre la falta de notificación con el informe motivado de la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura, por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual sirvió de sustento y base para su destitución, constituye el antecedente para que el Pleno tome dicha decisión administrativa, en base a los hechos investigados que eran de conocimiento propio de la sumariada, para lo cual se realizó el examen especial de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, y que fueron impugnados por la misma, alegando incluso la nulidad del informe de auditoría, dejando sentada constancia de su predisposición de depositar y cancelar los valores que la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura determine como valores no remitidos por el errado proceder de sus subalternos al liquidar los valores de recaudación por los servicios notariales; es decir, que la accionante tenía pleno conocimiento de los antecedentes y de los hechos investigados en el sumario administrativo por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, cuyo informe motivado es elevado al Pleno del Consejo de la Judicatura para su correspondiente análisis jurídico y posterior resolución. La falta de notificación del informe motivado a criterio de este Tribunal no genera una vulneración del derecho al debido proceso, ni el derecho a la defensa, por cuanto el mismo no genera efectos jurídicos al servidor judicial sumariado, tal es así que el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 117 determina claramente que al no ser la autoridad competente el Director Provincial para sancionar al servidor Judicial, emite un informe motivado que debe tener una recomendación de sanción, sin embargo de conformidad al artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial el mismo no es apelable, con recurso alguno, con ampliación, aclaración, porque no genera efectos jurídicos, es así que el pleno del Consejo de la Judicatura es la autoridad competente para imponer las sanciones disciplinarias, es por ello que el informe motivado al no generar efectos jurídicos y al no ser susceptible de recurso alguno no vulnera el derecho al debido proceso cuando el mismo no es notificado dentro del sumario disciplinario. Lo que si se notificó, y lo que sí genero efectos jurídicos es la

resolución de 13 de marzo de 2015, las 12h50, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro de expediente No. MOT-178-SNCD-2015-ACS, y de esta resolución que generó efectos jurídicos, cabe el recurso horizontal y el de impugnación del acto administrativo que fue accionado por la legitimada activa oportunamente en vía expediente y eficaz, agotando la vía administrativa, no obstante se alega vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso que este Tribunal no advierte...”.

La Legitimada activa alegó que la resolución de 13 de marzo del 2015, dentro del expediente Disciplinario MOT-178-SNCD-2015-ACS, habría violentado lo establecido en el Art. 76 numeral 7 literal I) de la Constitución. La resolución de 13 de marzo del 2015, dentro del expediente Disciplinario MOT-178-SNCD-2015-ACS, aducida como inconstitucional, cumple con los parámetros para que una resolución se encuentre debidamente motivada; es razonable por cuanto guarda armonía con los preceptos constitucionales y legales que integran nuestro ordenamiento jurídico, donde enuncia las normas y principios jurídicos en los que funda su resolución y explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, que conducen a tomar la decisión administrativa de destitución de la Dra. Clelia Mariela Pozo Acosta, la cual se encuentra enmarcado en el Capítulo VII del Código Orgánico de la Función Judicial, que refiere sobre las Prohibiciones y Régimen Disciplinario, encontramos el Art. 109 la identificación de las infracciones gravísimas, a las que corresponde la sanción de destitución y es así como en el numeral 15 dice: “No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o totalidad de ellas, o cobrar más de lo debido a los usuarios del servicio para beneficiarse”, llegando a la conclusión de que la Resolución de 13 de marzo del 2015 dentro del expediente Disciplinario MOT-178-SNCD-2015-ACS, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, cumple con los parámetros constitucionales de lógica, razonabilidad y comprensibilidad, encontrándose debidamente motivada”.

Se ha indicado por parte de la accionante, que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica ya que la sanción emitida en su contra es producto de un procedimiento viciado, por lo que se ha producido una violación flagrante de sus derechos constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. Como se dejó indicado, el derecho a la seguridad jurídica establece la existencia de normas jurídicas claras, públicas aplicadas por las autoridades competentes; en el presente caso, no ha existido vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, en razón de que previo a emitir dicha resolución se realizó un análisis previo, se debe establecer que en este caso al tomar la definición que establece nuestra Carta Magna en relación a la figura de la seguridad jurídica y la doctrina descrita, encontramos que no se ha vulnerado este principio, por cuanto no se ha retrotraído la ley para ejecutar un acto que de por sí es legal, estableciéndose esta figura

dentro de la ley, que regula estos actos; de tal manera que lo aseverado por la accionante es contrario a su pretensión, indicando que la Resolución de 13 de marzo de 2015, a las 12h50 dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente disciplinario MOT-178-SNCD-2015-ACS habría sido contraria a la normativa pertinente y vigente para este efecto; sin embargo, se evidencia que lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro de la mencionada resolución, se sustenta en los informes técnicos y de análisis de aspectos financieros de auditoría y administrativos por tanto, la resolución administrativa dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del marco de sus potestades administrativas se encuentra ajustada al marco jurídico y constitucional”.

De acuerdo a la doctrina constitucional **LA MOTIVACIÓN** constituye un discurso justificativo de los fenómenos fácticos y jurídico-constitucionales que realiza el juez en el camino que recorre para llegar a su decisión. Este discurso permite establecer una estructura lógica de las aserciones realizadas y los juicios de valor que el juzgador realiza en el *iter* de su decisión, mismos que deben ser expresados y a su vez justificados.

Si se lee y analiza el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ésta cumple con la exigencia contemplada en las normas citadas y la doctrina sobre la motivación que existe en abundancia, se encuentran determinadas claramente cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su emanación; consta los antecedentes que han generado esta acción y la competencia de la Sala para conocer y resolver la causa, la fundamentación fáctica y jurídica en la que se sostiene la decisión tomada, se explica cuáles son los hechos que se considera probados, cuáles las pruebas que se invoca, la valoración de las mismas, las normas concretas que se han aplicado al caso, es decir, no existe arbitrariedad ni expresiones genéricas que podrían vulnerar este derecho, o que exista obscuridad, incongruencia o contradicciones como afirma la accionante, más bien, existe una racionalidad y vinculación jurídica con la norma positiva aplicable al caso, lo cual ha permitido asumir un juicio de valor y una resolución sobre la acción propuesta. Vale decir que la sentencia se encuentra correctamente estructurada con tres partes esenciales: expositiva, motiva o considerativa y resolutive.

Se verifica y se señala que se ha dado efectivo cumplimiento a las normas de procedimiento previstas en el artículo 86 de la CRE, sin que haya existido omisión de solemnidad alguna; se ha establecido la legitimidad activa y pasiva tal como lo prevé los artículos 9, literal a) y 41 de la LOGJCC; para seguidamente, tomando en cuenta la relación de los hechos y los argumentos de las partes, identificar el acto emitido por la autoridad pública no judicial que habría vulnerado los derechos del accionante y, a la luz de los artículos 11.4, 76.1, 88 de la CRE, y artículos 6, 41 y 42 de la LOGJCC se hace relación clara a los alegatos de la parte accionante y accionada. La Sala concluyó que la pretensión que contiene la demanda de

acción de protección no cumple con los requisitos de los numerales 1, 3 y 4 del Art. 42 de la LOGJCC, ya que los argumentos alegados no constituyen violación directa de derechos constitucionales considerados fundamentales y normas constantes en instrumentos internacionales de derechos humanos.

El acto de autoridad pública no judicial.- El acto es un hecho o una acción que procede de la voluntad de un sujeto. La acción constitucional ordinaria de protección cabe contra todos los actos de la autoridad pública no judicial. La Constitución emplea el término “actos”, que es una categoría muy amplia, no alude sólo al acto administrativo, como en la acción de protección; por lo tanto cabe la acción constitucional ordinaria de protección contra todo acto de la autoridad pública no judicial y, entre estos, los actos administrativos.

El juicio constitucional.- Litigar un juicio constitucional no es lo mismo que litigar un juicio civil, penal, laboral, incluso, contencioso administrativo. El Derecho Procesal Constitucional es una ciencia jurídica autónoma que se rige por sus propios principios en lo que se refiere a poderes del juez constitucional, legitimación activa, sentencia constitucional, alcances y efectos de la cosa juzgada, principios de bilateralidad y contradicción, reglas de la carga de la prueba, ejecución de sentencia, fundamentación de resoluciones judiciales, etc., incluso es de advertir que en el proceso de protección constitucional no existe término de prueba porque la ley no lo ha previsto, según el numeral 3 del Art. 86 de la Constitución tiene la expresión “en cualquier momento”, lo que equivale y empleando la lógica de la mencionada expresión que la prueba podrá presentarse entre la presentación de la demanda y antes de dictar sentencia. El derecho procesal constitucional lo encontramos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El juez sólo está autorizado para efectivizar la restauración del derecho vulnerado ordenando al órgano administrativo que la asuma, pues, lo que se decida en ejercicio de la misma se lo hará en el nivel de legalidad por la misma Administración. En el Estado constitucional de derechos se ha instrumentado normativamente sobre la base de un modelo que contienen tres elementos que sobresalen: a) La supremacía constitucional y de los derechos fundamentales que son todos los enunciados por la Constitución sean de libertad personal o de naturaleza social; b) El imperio del principio de juridicidad (legalidad) que somete todo poder público al Derecho; y, c) La adecuación funcional de todos los poderes públicos a garantizar el goce de los derechos de libertad y la efectividad de los sociales. **Los derechos fundamentales** son la expresión más inmediata de la **dignidad humana**. De lo anotado se desprende que el ser humano es ante todo portador de una serie de derechos, que en todo momento puede hacer valer frente al poder, y son fundamentales porque los seres humanos poseemos dignidad o calidad de persona humana, de ahí que estos tienen las características de imprescriptibles, inalienables, irrenunciables y universales.

Derecho a la Seguridad Jurídica.- Este derecho se encuentra contemplado en el Art. 82 de la Constitución de las República, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En la sentencia emitida por esta Sala, se evidencia claramente que se han aplicado las normas constitucionales y legales para garantizar el procedimiento señalado para este tipo de acciones, así como la invocación de normas expresas que justifican la decisión tomada por la Sala. En conclusión, el criterio emitido por esta Sala en la sentencia de acción de protección impugnada, se encuentra debidamente motivado y no es violatoria de la seguridad jurídica como alega la accionante. **Derecho al debido proceso.**- El derecho a la tutela efectiva comprende el derecho al debido proceso, en cuanto a los recaudos básicos que permiten la efectividad de la justicia y este a su vez tiene que ver con el **Derecho a la defensa**, cuya violación no ha sucedido en el presente caso, porque se aprecia sin lugar a dudas, que el trámite dentro de la acción de protección, conocida y resuelta por el Juez a quo, así como el trámite y resolución de la Sala, obedecen a normas constitucionales y legales propias del derecho procesal constitucional y en cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales; la accionante a lo largo de este proceso ha hecho uso del derecho a la defensa interviniendo en las diferentes instancias del mismo. **Derecho a la Tutela Judicial Efectiva e Igualdad ante la Ley.** No se advierte afectación, pues la accionante tuvo acceso a la justicia sin trabas ni condicionamientos, garantizando un proceso imparcial así como el ejercicio del derecho a la defensa, dictando una decisión debidamente fundamentada en derecho, sin que exista direccionamiento o mal animadversión por parte de los juzgadores hacia la accionante como afirma en su demanda de acción extraordinaria de protección.

Por lo expuesto la resolución de la Sala no ha violado los derechos y garantías básicas contemplados en el Art. 76, numerales 1, 3 y 7, literales c) y h), al haber declarado la acción de protección improcedente, en virtud de lo estipulado en el artículo 42, numerales 1, 3, y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Sala, en ejercicio de una reflexión constitucional, cumplió con el deber de argumentar satisfactoriamente su decisión, no puede afirmarse que, por ello, la sentencia haya vulnerado la garantía constitucional de debido proceso, falta de motivación y seguridad jurídica, tutela judicial efectiva.

En tal virtud, la acción extraordinaria de protección formulada por la accionante debe ser rechazada por improcedente, la Sala actuó conforme a los mandatos constitucionales, con mayor razón si se tiene en cuenta que, según ha expresado la Corte Constitucional, la sola inconformidad del accionante con la decisión judicial objeto de la impugnación, así como la enumeración de numerosos artículos con normas constitucionales y legales supuestamente

violados, no implica, en ninguna circunstancia, que exista vulneración de derechos. La sentencia emitida se halla debidamente motivada conforme los parámetros de la Corte Constitucional, es razonable, lógica y comprensible; se han enunciado los fundamentos constitucionales en los que nos hemos basado para desechar el recurso de apelación de la legitimada activa Clelia Mariela Pozo Acosta.

3.- PETICIÓN

Por el análisis y los argumentos antes expuestos, **solicitamos que, en sentencia, se niegue la presente acción extraordinaria de protección, por ser improcedente**, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 58, 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

4.- FUTURAS NOTIFICACIONES:

Notificaciones que nos correspondan dentro de la presente causa, las recibiremos en los correos electrónicos: Leonardo Xavier Barriga Bedoya leonardo.barriga@funcionjudicial.gob.ec, Mónica Beatriz Bravo Pardo monica.bravo@funcionjudicial.gob.ec, Diana Gisela Fernández León diana.fernandez@funcionjudicial.gob.ec.

Dr. Leonardo Barriga Bedoya

JUEZ RPOVINCIAL

Dra. Diana Fernández León

JUEZA PROVINCIAL

Dra. Mónica Bravo Pardo

JUEZA PROVINCIAL